

PRESENTACIÓN

El Instituto Popular de Capacitación - IPC difunde en esta edición de la serie Re-Lecturas un conjunto de miradas sobre el estado de realización y/o violación de los Derechos Humanos que parten desde varias organizaciones que hacen parte, en su mayoría, de un movimiento en la ciudad hoy agrupado en la Asamblea Regional de Derechos Humanos.

Intentando dar un hilo conductor a estas diferentes formas de aproximarse a la realidad de los Derechos Humanos en Medellín y regiones colindantes, se puede afirmar que desde distintas ONG y organismos de control como la Personería de Medellín, se quiere demostrar que la realidad de los Derechos Humanos en la ciudad no pasa solo por la disminución de homicidios, que obviamente se lee como un factor importante de avance en la ciudad, sino que también la violación de los Derechos Humanos incluye el derecho a la vida y en un concepto amplio de dignidad, el respeto a la existencia, a la autonomía, a la ciudadanía social, política, civil y cultural.

Ese relativo respiro que da la realidad actual en cuanto a menos vidas eliminadas deja ver otras verdades centrales de la constitución de una ciudadanía libre, incluida, antes invisibilizada por lo abrumador de la muerte en la ciudad. De igual manera, un contexto marcado por la aparente reinserción paramilitar y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz pone el tema del derecho a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y

las garantías de no repetición como puntos claves para los retos de una sociedad con vigencia plena de los Derechos Humanos. Hoy, nuestra pregunta es por las condiciones de vida de quienes habitamos este territorio, y ya no solo por las condiciones en que mueren, año tras año, cientos de personas en la ciudad.

Hoy, también nos interesa observar qué tanta vida digna se instala con la disminución de la muerte, qué tanta libertad y protección integral, y qué tanta restitución tiene la sociedad entendida como una construcción, vivida por seres humanos y redes sociales de distinta índole, por la expropiación de sus pocos bienes, por la pérdida de sus derechos, de sus entornos de vida. En este mismo sentido, se presenta una mirada crítica a los avances en el derecho a la educación, donde si bien se identifican algunos avances, es claro que aún no se instala un enfoque pleno de derechos, especialmente en el tema de la calidad.

Sigue siendo inconcebible para la sociedad, que además de no haber resuelto la situación de miles de desplazados(as) que en los últimos 15 años han llegado a Medellín, todavía ingresen nuevos grupos de familias expulsadas de diferentes subregiones de Antioquia, especialmente del Oriente; es preocupante que la violencia sexual se instale y degrade la vida, especialmente de las mujeres; que campesinos e indígenas pierdan el derecho a la tierra, no solo por hechos de violencia, sino también que esto se legitime con la legislación propuesta por el gobierno de Alvaro Uribe; que grupos sociales y comunidades vean violados sus derechos: las mujeres, los sectores de la comunidad LGBT, los(as) jóvenes que además quieren de manera relevante hacer respetar su decisión de no ir a la guerra exigiendo su derecho a la objeción de conciencia, es más, proponiendo a través de este derecho una sociedad para la paz y no para la guerra.

Es inconcebible que haya reinserción sin desmonte paramilitar, y que consecuencia de ello, la libre expresión y movilidad estén, no solo restringidas, sino también controladas a través del miedo que infunden las estructuras paramilitares que siguen vigentes en la ciudad, inquisidores que castigan según su concepto de orden social autoritario y ausente del respeto a los derechos integrales de las personas, una estructura paramilitar que

quiere endiosar a perpetradores de crímenes de lesa humanidad e instalar, además del miedo, el olvido y la impunidad.

Éste no es un texto académico, es una herramienta narrativa, desde diferentes visiones y sectores, que dibuja la ciudad que se ve y se siente. Hay aquí una huella que en la vida de personas en sus individualidades, en las comunidades, territorios y organizaciones sociales deja la violación a los Derechos Humanos en la ciudad y en la región en general.

María Soledad Betancur Betancur

Directora de la Estrategia de Investigación y Observatorio

Instituto Popular de Capacitación - IPC